

de pesetas y el déficit comercial del sector —una vez restadas las exportaciones— superó los 100.000 millones, es decir, constituyó más de la tercera parte del déficit comercial global de la economía. Y la tendencia se mantiene, si no es que aumenta, en los primeros meses de 1975.

En palabras de José Ramón Lassuen, la «figura» invitada a las Jornadas «como consecuencia de esta errónea especulación (especialización de la producción nacional en los sectores menos dinámicos: maquinaria textil, maquinaria de vapor, material ferroviario y barcos, descuidando casi totalmente los más dinámicos: maquinaria agrícola, de oficina y control, de obras públicas y aviación) se ha producido una creciente dependencia de la inversión en bienes de equipo de la importación, incluso en los agregados más tradicionales, como maquinaria mecánica, por especializarse en los componentes más regresivos de cada agrupación».

La política industrial ha fallado completamente. Y es precisamente en el auge de la recesión cuando los errores aparecen con mayor claridad. Contradictoriamente con ello, la propia Administración, cliente importante del sector, mantiene e incluso aumenta la tendencia de hacer compras en el exterior. Como ha afirmado el señor Millán Barbany, presidente de SERCOBE, «los esfuerzos realizados hasta la fecha para planificar y coordinar la demanda de los organismos oficiales y entidades paraestatales no han dado resultados suficientemente satisfactorios, ya que o bien no se ha suministrado la información requerida en tiempo oportuno o bien la citada información no ha tenido el carácter definitivo necesario para poder ser útil a los fabricantes nacionales». Sin embargo, las informaciones indican algo más que lo que podría deducirse de estas palabras: varios organismos oficiales están haciendo importantes compras en el exterior de productos cuya calidad es idéntica a los de fabricación nacional.

Mientras tanto, los fabricantes exigen, ya de una manera tradicional y cada vez más enardecida, una política de sustitución de importaciones. SERCOBE afirma que más de la mitad de las importaciones realizadas hubieran podido ser satisfechas por productos nacionales, en lo que se refiere a calidad y precios. Y de cara a reequilibrar la situación, proponen la adopción de las siguientes medidas:

— Elevación en un punto del coeficiente de inversión de la Banca privada, que permitiría una mayor financiación de las ventas.

— Supresión definitiva de todo tipo de bonificaciones arancelarias, establecidas actualmente con gran proliferación, y sustitución de las mismas por otro tipo de estímulos que no constituyan un trato de favor para los bienes de equipo extranjeros sobre los nacionales.

— Exigencia de que en las inversiones públicas los contratistas principales de los suministros de bienes de equipo estén constituidos por empresas fabricantes españolas.

— Programación anticipada de la demanda oficial, de manera que la industria pueda satisfacerla, con previsión suficiente.

Teóricamente, y ello siempre en el supuesto de que la crisis no vaya a más, la industria tiene varios aliados. De un lado están los numerosos programas y planes de inversión industrial programados por el Gobierno, alguno de los cuales está más o menos congelado por el momento, dada la actual situación económica: el Programa Siderúrgico Nacional, el Plan Eléctrico Nacional, el Plan de Ampliación de Refinerías, el Plan de Construcción de Autopistas, el Régimen de Concerto de la Minería de Carbón, el Plan de Modernización de la Renfe, etcétera. De otro lado tenemos el propio desarrollo de la producción de energía nuclear, que en muy pocos años va a generar un mercado de bienes de equipo del orden de los 36.000 a 39.000 millones de pesetas anuales, cerca del 20 por 100 de la producción total del sector en 1974. Y teóricamente la industria española podría cubrirlo. Pero, como afirmó el director general de la Junta de Energía Nuclear, Francisco Pascual Martínez, «el sector de fabricantes de bienes de equipo ha alcanzado un escaso grado de desarrollo tecnológico propio; hasta ahora ha utilizado fundamentalmente tecnología procedente del exterior. Si bien esta importación de tecnología ha permitido desarrollarnos y fabricar componentes de alta calidad, esta solución no debe considerarse como permanente, sino que debe evolucionar en dos fases sucesivas: la primera, mediante una asimilación de la tecnología importada y la segunda, mediante un desarrollo tecnológico propio».

Sin tecnología propia, sin una estructura financiera sólida, en total dependencia de la Banca, sin una estructura comercial ágil, con un planteamiento productivo desfasado con relación a las necesidades del país, los fabricantes poco pueden hacer para variar la actual situación: sencillamente pedir mayor proteccionismo arancelario —que con toda seguridad el Gobierno no está dispuesto a conceder— y mayores facilidades crediticias a través del aumento del coeficiente de inversión —que la Banca va a tratar de impedir con toda su fuerza—. Las medidas tradicionales.

Y todo ello en la conciencia de que esas medidas a corto plazo no van a poder variar sustancialmente la situación coyuntural, por la inercia de la que hablábamos. Los más pesimistas a este respecto afirman que de no producirse la reactivación dentro del segundo semestre de este año, el sector habrá entrado en picado en la crisis. ■ CARLOS ELORDI.

## AUXILIARES TÉCNICOS SANITARIOS

### EN BUSCA DE UN TÍTULO

● Decididamente, las alumnas de Formación Profesional Sanitaria no tienen suerte. Cursados ya los dos años que integran el primer grado de este tipo de enseñanza, instituida por el Ministerio con carácter experimental en 1972, y a punto de acabar muchas de ellas el curso de «complementaria», paso previo al acceso al segundo grado, todavía no han conseguido la titulación correspondiente ni el reconocimiento por parte del Ministerio de Trabajo de sus estudios.

Así, cuando acuden en busca de empleo a un centro de la Seguridad Social y presentan, a falta del título oficial, un certificado de la Escuela Profesional que acredita la duración del aprendizaje efectuado (dos cursos a base de seis horas de clase diarias, con asignaturas técnicas, como Anatomía, Biología, Higiene, Primeros Auxilios, Pediatría, Dietética, además de otras de carácter complementario: Derecho, Lengua o Matemáticas), los al menos en teoría, «auxiliares técnicos sanitarios» se encuentran con que están prácticamente en las mismas condiciones que cualquier advenedizo y en clara inferioridad con respecto a toda persona que haya seguido, por ejemplo, uno de los cursillos para auxiliares de clínica que organiza regularmente el PPO.

En el «baremo de méritos a aplicar en el concurso abierto y permanente para plazas de auxiliares de clínica de la Seguridad Social», el cursillo acelerado del PPO suma, en efecto, dos puntos y está al mismo nivel que el certificado de damas enfermeras españolas y medio punto por debajo de la categoría reconocida a las divulgadoras rurales de la Sección Femenina o a las auxiliares de la Cruz Roja con certificado de la Asamblea Suprema. La figura del «auxiliar técnico sanitario» ni siquiera aparece: sencillamente se ignora su existencia.

Esto no quiere decir, sin embargo, que esas muchachas no puedan encontrar trabajo, llegado el caso: pueden entrar en una clínica dependiente de la Seguridad Social o privada como cualquier persona sin titulación ni experiencia, y realizar tareas tan poco especializadas como la de hacer camas. También pueden, naturalmente, dedicarse al cuidado del enfermo a domicilio, aunque con las desventajas que entraña el no estar acogidas a los beneficios de la propia Seguridad Social y sí en cambio constantemente expuestas al azar del desempleo. Algunas son reclutadas por ciertas empresas particulares que se dedican a hacer grupos sanguíneos por escuelas, fábricas y oficinas. Sin embargo, este tipo de trabajo también tiene sus riesgos. Así, por ejemplo, el año pasado, unas muchachas fueron detenidas por la

Guardia Civil en un pueblo de la provincia de Toledo, adonde se habían trasladado a recoger muestras de sangre, porque, según se descubrió, la empresa que las había empleado carecía de permiso de Sanidad para sus operaciones. Por otro lado, las muchachas tampoco estaban facultadas, al parecer, para pinchar.

Y es precisamente ahí, en el terreno de las competencias y atribuciones profesionales donde existe el mayor confusiónismo: ¿Qué puede hacer y qué le está, por el contrario, vedado a un auxiliar técnico sanitario? Eso es lo que intentaron averiguar, sin éxito, las muchachas implicadas en el incidente con la Guardia Civil, dirigiéndose a varios organismos vinculados al Instituto Nacional de Previsión. Los funcionarios con quienes se entrevistaron no pudieron darles ninguna respuesta, ni positiva ni negativa, pues en el Ministerio de Trabajo no se habían dado por enterados de que tales estudios profesionales existían realmente.

Finalmente persuadidas de que la solución a sus problemas no va a lloverles del cielo, los alumnos de FPS de diversos centros madrileños han dirigido estos días un escrito al director general de F. P. y E. E., en el cual, tras exponer algunos de los problemas apuntados, piden que el Ministerio de Educación y Ciencia entregue la titulación correspondiente a las que ya han acabado el primer grado; que se informe a los órganos competentes del Ministerio de Trabajo, a fin de que dicho título sea incluido en el baremo de méritos para ingresar en los centros sanitarios de la Seguridad Social «con una calificación no inferior a tres puntos»; que no se descuiden absolutamente, como ocurre ahora, las enseñanzas técnicas durante el curso llamado «de complementarias», sino que se unifiquen el primer grado y este curso, de modo que no se produzca ningún desfase entre ambos; que se suprima la prueba de madurez prevista para el acceso de Formación Profesional de Segundo Grado; que se aumente el número de especialidades a cursar en ese segundo grado (las previstas hasta ahora son Nuclear, Radiología, Laboratorio y Dietética), y que se establezca a partir del próximo curso la completa gratuidad de la FP de primer grado, de acuerdo con las directrices, nunca suficientemente cumplidas, de la Ley General de Educación.

En el estado actual de nuestra sanidad, cuanto tan urgente necesidad hay de personal técnico especializado a todos los niveles, resulta no ya sólo socialmente injusto, sino también ilógico que se desperdicie y se mantenga en tal situación de irregularidad a unas muchachas

cuyo único pecado ha sido el haber confiado en unos cursos promovidos por el propio Ministerio de Educa-

ción. El país, evidentemente, no está para esos lujos. ■ JOAQUIN RABAGO.

## SANIDAD

### LOS M. I. R. VUELVEN A LA HUELGA

Entre dos mil y dos mil quinientos MIR se mantienen en huelga en unos veinticuatro centros sanitarios de trece provincias españolas. Sus reivindicaciones datan ya de hace varios años. Pero la falta de diálogo y la política de hechos consumados que se achaca a la dirección del INP han revitalizado el conflicto.

La huelga anterior finalizó en octubre del pasado año por un acuerdo entre la Comisión Nacional de los MIR y la delegación del INP. El delegado general del INP, señor Martínez Estrada, se comprometió entonces por escrito, con sello y firma del INP, a eliminar el certificado de buena conducta, aumentar los salarios y no vetar a ningún médico en su trabajo. Así como a continuar las negociaciones sobre las restantes reivindicaciones de los MIR «si prosigue la normalidad asistencial».

Y la normalidad asistencial continuó, pese a que los aumentos salariales fueron menores de los pedidos y a que se mantuvo el veto a ocho médicos expulsados varios meses antes de un hospital de Bilbao. Hasta el punto de que la misma suspensión durante meses de las conversaciones MIR-INP no hubieran quizá provocado el conflicto abierto de no mediar una nueva decisión de las autoridades del Instituto.

La chispa final vino hace pocos días de la mano del presidente del Consejo General de Médicos, señor Lafuente Chaos, quien comunicó oficiosamente a varios representantes de los MIR las condiciones de un nuevo contrato elaborado, sin participación alguna de la Comisión Nacional de los MIR, entre el INP y el señor Lafuente.

Esta actuación unilateral, sin contar con los representantes elegidos, y las características del nuevo contrato que, además de ser administrativo y no laboral, es «impreciso y caduco» en opinión de los médicos, y «no satisface las necesidades laborales de los MIR», condujo a una protesta generalizada, expresada mediante un escrito con más de mil firmas de médicos de toda España.

Pero la delegación de los MIR que llevó la carta no consiguió entrevistarse con los responsables del INP. El nuevo intento de diálogo y de reanudación de las conversaciones no dio resultado.

Sólo entonces las asambleas de los MIR decidieron ir a la huelga, mostrando su disposición permanente al diálogo, pero exigiendo que el INP se defina sobre sus reivindicaciones, concretadas fundamentalmente en: contratos de carácter laboral; salarios de 20.000, 22.000, 24.000 y 26.000 pesetas, con revisión

semestral según el alza del coste de la vida; retribución de las guardias a 2.000 pesetas; 100 por 100 del salario en caso de accidente o enfermedad; Seguridad Social e IRTP a cargo de la empresa; derecho a guardería infantil para sus hijos; abolición de las cláusulas represivas del contrato; composición paritaria y elección democrática y autónoma de las comisiones de educación médica; elaboración del reglamento de régimen interior por representantes elegidos de todos los estamentos y reconocimiento de la Comisión Nacional de los MIR como única representativa y con capacidad negociadora con el INP.

En torno a estos puntos, que los MIR consideran absolutamente necesarios como reconocimiento de su condición de trabajadores de la sanidad y no de becarios, se va extendiendo la huelga. De Madrid, Valencia, Sevilla, Granada, Oviedo y Murcia pasa a Toledo, Salamanca, Santander, Barcelona, Santiago y La Coruña, Cartagena y Albacete...

En todos los centros se respetan las guardias y atenciones de urgencia. En muchos casos, como en las clínicas de La Concepción y Puerta

de Hierro, de Madrid, los médicos explican a los enfermos y a sus familiares las causas del conflicto. En otros comienza a darse la solidaridad de los médicos en plantilla, que se suman al paro o apoyan de diversas formas a los MIR.

Mientras, los médicos internos y

residentes dan a la huelga un carácter indefinido «como única forma de forzar al diálogo al que siempre estaremos dispuestos» y hacen responsable al INP «del posible déficit asistencial que se derive de esta situación». ■ ENRIQUE BUSTAMANTE.

## PRENSA

### ANTONIO GUERRA, ANTE EL T.O.P.

El jueves 12, algunos diarios informaban de varios hechos relacionados con los periodistas y la Prensa española: el secuestro del último número de «Cuadernos para el Diálogo»; la detención del director de la revista regional aragonesa «Andalán», Eloy Fernández Clemente, y el envío de telegramas desde varias Asociaciones de la Prensa pidiendo su puesta en libertad; la absolución definitiva, al desistir el fiscal de la Audiencia de Barcelona de presentación de un recurso de casación, del ex director de «Destino», Xavier Montsalvatge; la presentación, en fin, en el Ministerio de Información y Turismo de un escrito dirigido al titular de dicho departamento, León Herrera, y en el que ciento cincuenta periodistas madrileños expresaban su preocupación por la crítica situación por la que atraviesan los periodistas y la Prensa y planteaban una serie de reivindicaciones (supresión de las jurisdicciones es-

peciales para delitos de Prensa, protección del ejercicio informativo, medidas que amparen el secreto profesional, modificación de la Ley de Secretos Oficiales...) «en el contexto de unas libertades públicas que caractericen un Estado de Derecho».

Este mismo día, a las cinco y media de la tarde, comparecía ante el Tribunal de Orden Público el periodista sevillano Antonio Guerra, ex redactor de «Diario de Barcelona», procesado como presunto autor de un delito contra las Leyes Fundamentales por su artículo «Contra la elección de una "miss"», publicado en el «Brusi» el 2 de julio de 1974. Un artículo en el que Antonio Guerra comentaba la oposición de la Sección Femenina de La Coruña a que el Ayuntamiento de dicha capital organizara la elección de «Miss España» («las chicas del Movimiento han considerado que el Ayuntamiento no está para

